



FVF: Las razones del malestar

Hugo Rangel Vargas

Viernes 9 de Mayo de 2014

En días recientes, una casa encuestadora en Michoacán ha dado a conocer que la aprobación de la administración de Fausto Vallejo Figueroa se encuentra en niveles cercanos al 30 por ciento, y que la aceptación de la gestión del mandatario entre los michoacanos ha caído en 23 puntos porcentuales de octubre de 2012 a marzo del presente año. Para tomar un parámetro de lo ocurrido con los niveles de aceptación del gobierno de Vallejo Figueroa, basta decir, por ejemplo, que el presidente venezolano Nicolás Maduro obtuvo un nivel de aceptación del 47 por ciento en marzo de 2014, cifra que puede ser puesta en contexto pese a la crisis política inducida y a la campaña mediática que ha enfrentado el gobernante sudamericano.

Otro elemento que pone el parámetro preciso de la desaprobación de la opinión pública hacia la gestión del priista se encuentra en las evaluaciones de sus antecesores. Lázaro Cárdenas Batel cerró el último año de su administración con una aceptación del 54 por ciento, según una encuesta levantada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, en diciembre de 2007; mientras que Leonel Godoy Rangel lo hizo, según cifras de Consulta Mitofsky para septiembre de 2011, con un nivel de aceptación del 65 por ciento. En el caso de este último mandatario michoacano, el punto más crítico de su gestión, en términos de cuestionamiento de la opinión pública estatal, e incluso nacional, lo enfrentó justo a mediados de 2009, con el operativo conocido como Michoacanazo; en ese momento, sin embargo, la aceptación de Godoy Rangel se ubicó en un 52 por ciento.

Pero los datos vistos de manera aislada poco hablan de una realidad concreta en la que se reproducen fenómenos que inciden de diversas formas en la opinión que los ciudadanos expresan en este tipo de instrumentos científicos llamados encuestas. En este sentido, la opinión diferenciada de los michoacanos con respecto, por ejemplo, a las administraciones de Vallejo Figueroa y de Godoy Rangel, se han encontrado influenciadas en sus respectivos momentos por una realidad concreta de los michoacanos, de la cual vale la pena revisar algunas aristas.

Pese a enfrentar una crisis política que derivó de las múltiples detenciones de funcionarios públicos por parte del gobierno federal en junio de 2009, la administración de Leonel Godoy había recibido un estado que crecía económicamente por encima de la media nacional, y para 2008, primer año de su mandato, el PIB estatal había crecido en 3.5 por ciento, cifra superior a la del PIB nacional equivalente al 2.1 por ciento. Esto se vería reflejado en una tasa de desempleo abierta de apenas 2.8 por ciento para el cierre de 2008, un punto y medio por debajo de la media nacional. Esta pujanza económica se tradujo en un mejor posicionamiento del Michoacán en términos de posición competitiva, según lo reflejaría el Instituto Mexicano de Competitividad en su "Análisis de competitividad 2010", cuyas conclusiones se cimentan en cifras que llegan hasta 2008.

La realidad de Michoacán en el último par de años ha sido contrastantemente devastadora para el crecimiento económico. Según el indicador de la actividad económica publicado por el Inegi, para el último trimestre de 2013 la economía michoacana había tenido una tasa de crecimiento negativo del 0.8 por ciento, mientras que la economía nacional lo había hecho en términos positivos en cifra equivalente al 0.7 por ciento. Por su parte, la tasa de desocupación, si bien sigue estando por debajo de la nacional, es superior a la de 2008, ubicándose ahora en 3.23 por ciento. Ello ha derivado en que calificadoras internacionales como Fitch Ratings tengan en observación negativa a Michoacán a partir de 2013. La pujanza económica del estado llegaba a su fin y ello trae consecuencias para la percepción de los ciudadanos respecto a sus gobernantes.

En materia de seguridad, justo en el punto más bajo de la aceptación de la opinión pública hacia su administración, el gobierno de Leonel Godoy presentaba cifras de delitos del fuero común prácticamente sin crecimiento; en este sentido, comparando junio de 2009 con junio de 2008, la incidencia delictiva en esta materia se incrementó apenas en un seis por ciento. Mientras tanto, la caída en la aceptación de la administración vallejista parece estar precedida de un crecimiento exorbitante de las cifras de delitos del mismo fuero. Así las cosas, comparando marzo de 2013 con marzo de 2012, los delitos de la materia han mostrado un incremento de 51 por ciento.

A todo este clima de estancamiento económico y de inseguridad que parece incidir en la opinión negativa de los ciudadanos hacia la administración de Fausto Vallejo, habrá que agregar la inestabilidad política derivada de la evidente inestabilidad de su gobierno provocada por su estado de salud en meses anteriores y la clara falta de oficio en la atención a las demandas de grupos organizados de la sociedad civil, que han visto crecer la intensidad y el número de sus manifestaciones en la vía pública a través de marchas y tomas de espacios públicos.

Pero de manera casi indecible, el clamor de la opinión de los michoacanos expresado en el rechazo hacia la gestión vallejista se centra en la ilegitimidad de su gobierno, misma que no se finca en el cuestionamiento hacia la autoridad electoral que le entregó la constancia de mayoría, sino en la evidente falta de probidad con la que actuaron algunos de sus operadores políticos, quienes pervirtieron el principio maquiavélico de la razón de Estado dejándolo en una simple disputa por el poder. Ahora que la debacle del desgobierno de Vallejo Figueroa parece que cobrará factura electoral, vale la pena preguntar qué nuevas nos traerá la operación política priista para intentar que los michoacanos olvidemos nuestro malestar.